OPINAR

EDICION 222

«La fuerza de las ideas»

FUNDADO POR EL DR. ENRIQUE TARIGO

EDICIÓN DIGITAL
31 de octubre de 2013
www.opinar.com.uy

Nuevas agresiones y aires de cambios en Argentina. Tabaré Viera



Médico Julio Trochansky del SMU

«La oposición en el Hospital Militar está dentro del propio Gobierno»



CANTANDO LA JUSTA

Levantar el centro y cabecear

Por Jorge BATLLE

Eso fue lo que dijo el Presidente Mujica cuando se le preguntó sobre la adjudicación de canales de televisión a la empresa La Diaria, agregó además, que esa empresa, que solicitaba un canal había pedido 400.000 dólares para sacar una revista (eran 40.000 y no 400.000), con lo que la descartó de recibir una respuesta afirmativa a su presentación.

El Ministro de Industrias, el Sr. Kreimmerman, recomendó adjudicar los canales TV digital a la empresa VTV (Tenfield – Casal) y a la productora POP TV. Más tarde, los señores Frugoni y Buonomo se entrevistan con los representantes de POP TV y le dicen que pueden perder la licitación si no comparten con el canal Giro (cooperativas La Diaria y Demos) el canal que, por las declaraciones del Ministro, POP TV estaría a punto de recibir.

Esto es lo que ha pasado. Se agrega a ello solamente las declaraciones del grupo político frente amplista orientado por el Vicepresidente de la República Cr. Astori cuando reclama transparencia en este procedimiento y solicita que se postergue la decisión.

El gobierno finalmente resuelve adjudicar un canal a VTV (con el Sr. Casal, que estuvo la semana pasada en Anchorena, han de haber estado conversando sobre este tema y sobre algún otro asunto de carácter judicial) , y el otro a las cooperativas Demos y La Diaria.

Las cosas están claras, lo dice el Vicepresidente de la República en forma muy precisa, el procedimiento es poco transparente, nada claro. La resolución inicial la había dado el Ministro a las empresas que le parecieron las más adecuadas, y eso lo cambiaron. El cambio se debió no a cuestiones técnicas sino a cuestiones de carácter político. No se lo habían dado antes a la Diaria como el propio Ministro lo dijo, se lo dieron a posteriori, quitándoselo a la otra adjudicataria, por una razón de carácter político claramente establecida por los señores Buonomo y Frugoni.

La reunión de ellos con los representantes de la compañía que había sido considerada por el ministerio como adecuada para asignar la adjudicación existió y nadie ha negado lo que dijeron. Como reconocían que era mejor, le pidieron que hiciera participar a la otra perdedora (La Diaria), agregando que si no lo hacían podían perder la adjudicación. Tuvieron razón, perdieron la adjudicación. Para salvar la situación lo que hubieran preferido es que los ganadores, la empresa POP, le hubiera dado participación a La Diaria, como dijeron que no, con absoluta transparencia se la quitaron.

El Presidente pide excusas por haberse equivocado. ¿En qué se equivocó el Presidente?, no se equivocó en nada, dijo la verdad.

1) Dijo que La Diaria no tenía recursos, eso lo dijo públicamente.

2)¿Qué dijo para si mismo?: lo político está por encima de lo jurídico.

3) Mandó a Buonomo y a Frugoni que hicieran un arreglo con POP TV para meter a La Diaria adentro sin armar tanto lío.

4) Dijo finalmente: «como te digo una cosa te digo la otra». Se la sacó al que ganó y se la dio al que perdió.

Consultó a Vázquez, que dijo que estaba de acuerdo con este procedimiento.

Qué dúo, a cuál peor.







Consejo Editorial
Tabaré Viera Duarte, Ariel Moller, César García Acosta.
Redactor Responsable
TCS César GARCÍA ACOSTA, Río Negro 1192/601
Teléfono: 099.686125
Arte: Wilmar Pereira
Registro MEC Nº 2169/2007, Tomo VI, fs. 388,
Registro de Ley de Imprentas. Web: www.opinar.com.uy.
Contactos cgarcia@opinar.com.uy
Gestión Comercial, José L. Ituño jituno@hotmail.com

Nuevas agresiones y aires de cambios en Argentina



Tabaré VIERA
Senador de la República. Fue Presidente de Antel, Director de OSE e Intendente de Rivera 2000/05 y 2005/10

En un nuevo acto de represalia por la autorización uruguaya de aumentar la producción de la planta de UPM, el gobierno argentino anunció la prohibición de que buques transborden mercadería de esa procedencia en puertos uruguayos.

Es una verdadera agresión a nuestra república, esto significa la pérdida del 25% de la operativa de carga del puerto de Montevideo, unos 100 millones de dólares al año y la pérdida de varios puestos de trabajo.

La enlutada presidenta argentina no se anda con chiquitas y tiene una rencorosa actitud hacia nuestro país, no ha perdonado que los finlandeses optaran por invertir en tierras orientales, ni que tengamos playas más bonitas y sus compatriotas opten por hacer sus vacaciones estivales en nuestras costas. Ni siquiera ha podido superar que Artigas fue Oriental y no Argentino.

La histórica disputa de puertos sigue siendo para esta prepotente gobernante, una verdadera «astilla debajo de la uña».

No es la primera acción contra el trabajo de los uruguayos, la historia recoge múltiples ejemplos y en nuestros días no solo sufrimos el corte de puentes sino que la propia Cámara de Industria denunció hace pocos días que exportadores uruguayos que también comercian con Argentina desde otros países, reciben diferente trato en la operativa en perjuicio de nuestro país.

¿Qué ha hecho nuestro gobierno? ¿Qué acciones ha emprendido la Cancillería? ¿Cuál ha sido la actitud de los órganos del Mercosur?

Una vez más afirmamos que Uruguay carece de una «Política Exterior». La misma es conducida por el impulso del variable humor del presidente Mujica, fundamentalmente en lo que tiene que ver con Argentina y el Mercosur.

Se ha equivocado el Presidente al no negociar desde posiciones más fuertes cuando este vecino solicita algo o incumple con los tratados. Desde el fracaso de Tabaré Vázquez y su ministro Reynaldo Gargano enfrentando al entonces presidente Néstor Kirchner, se pasó al otro extremo en una posición casi de sumisión. El peor ejemplo fue la decisión de suspender a Paraguay del bloque regional y el consecuente ingreso de Venezuela.

Pero felizmente parece que el fin del Kirchnerismo comienza a acercarse.

Las recientes elecciones legislativas de esa nación, mostraron un quiebre, una fractura en el oficialismo, que se concretó en una dura derrota de la Presidenta Cristina K.

Con Sergio Massa nació un nuevo liderazgo dentro del polifacético Peronismo, pero de diferente signo que el actual gobierno.

En momentos en que no se sabe a ciencia cierta quién gobierna la Argentina por el misterioso estado de salud de su presidenta, la oposición comenzó a crecer y Massa constituye un claro precandidato presidencial de oposición a la actual corriente oficialista.

Alcalde de Tigre, Massa era parte del oficialismo hasta que a principios de este año lanzó su propio espacio político en alianza con otros intendentes peronistas del conurbano bonaerense, el Frente Renovador.El perfil moderado de Massa ha sido uno de los mayores atractivos para captar el voto de un electorado cansado del estilo confrontativo del kirchnerismo. Sus propuestas para combatir la inflación y la inseguridad, dos de las principales preocupaciones de los argentinos, también contribuyeron a su popularidad. La oposición venció también en los otros cuatro grandes distritos del país, la capital argentina, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.Propuesta Republicana ganó en la ciudad de Buenos Aires y su líder, el alcalde porteño Mauricio Macri oficializó anoche su candidatura para presidente en 2015.

La esperanza de reconstruir lazos de buena amistad, de recuperar un socio estratégico que como vecino «de puerta» siempre estará allí y con cuyo querido pueblo nos unen raíces históricas comunes, está en ese cambio de gobierno.También en esta Patria debería haber cambios, para que nuevamente constituyamos una verdadera política de estado en relaciones exteriores. A la luz de lo actuado por los dos gobiernos frenteamplistas solo se dará con su salida del gobierno nacional.Cuánto extrañamos a Enrique Iglesias, a Didier Opertti y a los profesionales que conducían nuestras cuestiones internacionales!



Dinosaurio asustado

Por César García Acosta

El ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro definió como «sexo explícito», «antes lo hacían con tanguita y ahora en pelotas» y aventuró que la fórmula se aplicará en la elección nacional.
El ministro de Defensa definió como «sexo explícito» al Partido de la Concertación, conformado por nacionalistas y colorados para presentarse en forma conjunta a las elecciones departamentales de Montevideo en 2015.
En declaraciones recogidas por Subrayado, el ministro sostuvo que el acuerdo «es sexo explícito, pornografía abierta» y que con él los partidos tradicionales «se sacaron el taparrabos».
«Sostuvo que los apoyos que blancos y colorados se dieron entre sí en algunos departamentos del Interior se hicieron «avergonzándose, sin decirlo, con taparrabos, con hojita de parra, con tanga».
«Ahora ya es en bolas, en pelotas», remarcó Fernández Huidobro, en referencia al nuevo lema.
Hasta aquí los hechos.
Reflexionemos cómo Fernández Huidobro llegó al ministerio, cómo se desempeñó cuando era Senador y porqué se reiteran los problemas críticas en las fuerzas bajo su mando.
Simple: no ofrece garantías, no es republicano, no entiende que el «silencio» forma parte del «sonido» y quizá por eso su estridencia.
Sobre lo demás, de que los batllistas sólo pueden estar en el Frente Amplio, sepa el ex senador, ex tupamaro y quizá un muy próximo ser ex ministro, que usted no puede hablar ni juzgar al batllismo, porque usted sigue siendo tan enemigo de la democracia republicana como lo fue en la época en que la «biología» todavía le permitía empuñar un arma.

Nada natural



César GARCÍA ACOSTA
Técnico en Comunicación Social.Editor de OPINAR.
cesargarciaacosta@gmail.com.uy

Un futuro sin «carretas»

Un partido, un programa, varios candidatos y mucha amplitud ideológica. Sin embargo, no obstante la idea, el Partido de la Concertación por Montevideo deberá ganarse con presencia e inteligencia los votos batllistas. De lo contrario -la minoría determinante- habrá de sentirse liberada. Los valores independientes son ajenos a la tutela estructurada de los partidos. Hasta hubo motivación; de aquí en más debe haber convencimiento.

Casi siempre las oposiciones políticas han hablado de la lentitud en la toma de las decisiones de los gobiernos del Partido Colorado; es más, esta letanía ha sido atribuida históricamente al mismísimo Estado seguramente por esa transferencia que los colorados dejaron en su historia. Es que durante más de noventa años y casi sin pausas, incluso, después del advenimiento de la democracia, los colorados fueron los protagonistas principales.

Algo de todo esto puede ser cierto, mucho quizá sea fantasía y también habrá un poco de injusticia en esas afirmaciones. Lo cierto es que inequívocamente, el Partido Colorado ha sido quien forjó nuestra identidad republicana y toda esa institucionalidad uruguaya que nos caracteriza.

Hoy, sin los colorados en el gobierno, igualmente sigue siendo ésta colectividad una destacada protagonista. Y ahora, desde la antesala de una de las transformaciones más interesantes proyectadas sobre el país, se observa la construcción de una coalición política potencialmente creíble y suficientemente apta como para competir con el Frente Amplio en Montevideo. No se tenga dudas que esta innovación cultural e ideológica podría constituirse en la puerta que, de abrirse, devolvería la esperanza del cambio a la política sea cual sea el partido por el que se milite.

Ya no hay espacio para las «heladeras» de Sendic o para los «outsider» de la renovación con una visión casi periférica de las cosas.

El Frente Amplio que originariamente fue la suma de los partidos chicos, y que en sus primeras ediciones como coalición concitó el interés de algo más de 50 mil votantes, llegó con el correr del tiempo a la mitad del país, aunque no con una visión de gobernante, sino reivindicando estereotipos signados sólo en parámetros que fueron los que la mantuvieron vigente mientras se oponía a todo. Y en ese trajinar fue le llegó la práctica del gobierno y en él se agobió en la desesperanza por no cumplir con aquello que había prometido hasta mediante las armas, porque recuérdese que al menos su sector mayoritario, el MPP, fue quien se nutrió fundamentalmente con los Tupamaros.

Y cierto es que el Frente Amplio ya no es el Partido de Hugo Batalla de fines de los ochenta; ni siquiera del socialismo «sui generis» de Tabaré Vázquez, aunque tampoco, justo es decirlo, representa a la subversión ideológica del 26 de marzo o de los seguidores de Jorge Zabalza.

José Mujica, años atrás, dijo sentirse «más blanco que un hueso de bagual»; y se plantó con estilo federal queriendo gobernar como si fuera un «patrón de estancia», aunque sin oficio. Y precisamente esa inexperiencia fue la que lo llevó a pretender sentirse un «igual» con los Kirchners, cuando ellos sí han sabido por décadas ser los «patrones» no de una estancia, sino de un país. Se enfrentaron con el campo, arremetieron contra la prensa, eludieron al peso de la justicia y avasallaron la libertad haciendo doctrina tanto en la ley como en el Palacio de las Leyes. En esta margen del río de la Plata, aunque tentados -la versión frentista del kirchnerismo- nunca se animó a tanto.

Lo que tenemos por delante no es una tarea menor: las bases programáticas del nuevo partido político deben, en nuestra visión, representar al batllismo en la coalición por Montevideo. Y para eso no basta con tinta sobre papel.

La «carreta» a la que aludíamos líneas arriba debe quedar atrás. Un nuevo estilo debe forjar una realidad reclamada a voces a lo largo y ancho del país. Y esa realidad necesita a la filosofía batllista como fuente de inspiración para encarar la gestión de la vida cotidiana. Hay que apostara a la tarea básica del municipalismo pero aggiornada con mucha sustancia y asistencia social como verdadera política de Estado.

No alcanza con la intención: el tiempo que dista de las elecciones municipales parece mucho pero es poco; van a haber heridas que cicatrizar después de la campaña por las nacionales, y se precisa «imagen pública» que asocie al candidato con la gente.

No son muchos quienes pueden tomar ese timón político; aunque son menos de los que pensamos y tan obvios como nuestra propia identidad política.



Claudio LOSER
Graduado en la Universidad de Cuyo, Argentina, recibió su Maestría y Doctorado en Economía en la Universidad de Chicago

Economía de América Latina: nuevamente a paso lento

Ya transcurridos nueve meses de 2013, no se ha dado el esperado repunte de la economía de América Latina. No es solo el caso de esta región, pero, ciertamente, es cada vez más difícil de mantener la complaciente actitud de haber superado un pasado borrascoso. Las causas de la nueva situación son complejas y sería injusto adjudicarlas a la región. El así llamado mundo avanzado, y muy en particular el espectáculo vergonzante del cierre del gobierno y posible default técnico en los Estados Unidos así lo prueban. El menor dinamismo de los países emergentes, y en especial China, lo refuerzan.

Aún no han sido publicadas las nuevas predicciones de crecimiento por parte del FMI, en ocasión de la Reunión Anual este fin de semana. Sin embargo debemos esperar que se revisen hacia abajo los números publicados hace tres meses. En términos generales se puede estimar que el crecimiento de la economía mundial será de 2.5-2.8 % en 2013, comparado con 3.1% en la última predicción de Julio. Para 2014 se podría esperar un crecimiento de 3.5%, o sea una revisión hacia abajo de 0.3%. Esta revisión no es dramática, pero indica una clara tendencia negativa respecto de 2004-2011, incluso incluyendo la gran recesión de 2008-09.

América Latina ha experimentado una reducción en el crecimiento, de 4.3% en 2004-11, cayó a 3.0% en 2012. Mi estimado para 2013 es aproximadamente de 2.5% (una caída respecto del 3% esperado hace tres meses y 3.4% en Abril), y quizás 3% en 2014 (comparado con 4% proyectado en Julio). Esta reducción refleja principalmente la continua debilidad de la economía de Brasil, con un crecimiento máximo esperado de 2% en 2013; y la inesperada desaceleración en México, también a 2% para el año.

Sin embargo, la desaceleración se dará en prácticamente todos los otros países de la región, incluyendo, Argentina (a pesar de sus juegos estadísticos), Chile, Colombia, Perú , y Venezuela, pero afectando a los otros con seguridad.Las razones para la desaceleración son tanto externas como internas. Primeramente, la economía mundial crece menos reduciendo los volúmenes de exportación. Por otra parte los precios de las materias primas, que habían crecido fuertemente hasta 2012, descendieron desde entonces: en un 16 % en el último año de acuerdo a datos de The Economist, 10% de acuerdo a Bloomberg, y un estancamiento o pequeña reducción de acuerdo al FMI.

En una columna en Infolatam (25 de Abril de 2013) indiqué que «basados en estimaciones ... para el Foro de Economías Emergentes, aproximadamente 1.7 % de crecimiento anual (de America Latina) es explicado ... por los aumentos de precios de las exportaciones. Este valor constituye un tercio del crecimiento anual total del ingreso real de la región. .. el mero estancamiento de los términos de intercambio a los niveles actuales, llevan a una tasa de crecimiento de 2-2.5% (en 2013)». Tal como mencionara en esa columna, estas predicciones no eran exactas, pero claramente la región debe prepararse para un periodo de menores exportaciones y de menor crecimiento, a menos que se refuercen las políticas macroeconómicas y estructurales.

México está trabajando febrilmente en ello, pero Brasil, Argentina, Venezuela y otros están desoyendo sus experiencias de las décadas de los 80s y 90s, y confiados que la experiencia de la última década continuará. Sin embargo, es casi inevitable que se de un aumento en los déficits de cuenta corriente y fiscales, una fuerte reducción de entradas de capital, y presiones sobre el tipo de cambio. Todavía hay tiempo para corregir las políticas, con costos relativamente menores. Hoy quizás miramos hacia el pasado (2004-11) con añoranza, pero el peligro es que en poco tiempo tengamos ganas de llorar por las oportunidades perdidas en 2013.

«basados en estimaciones ... para el Foro de Economías Emergentes, aproximadamente 1.7 % de crecimiento anual (de America Latina) es explicado ... por los aumentos de precios de las exportaciones.

Médico Julio Trochansky del SMU

«La oposición en el Hospital Militar está dentro del propio Gobierno»

entrevista de Fabricio SUÁREZ

La creación del IMAE cardiológico del Hospital Militar siguió cosechando en estos días duros intercambios entre las partes involucradas. Las expresiones del ministro Eleuterio Fernández Huidobro sobre la existencia de una «magia blanca», reavivó la polémica. Los médicos debieron intervenir en el debate aplicando el bisturí a fondo analizando, incluso, denunciar por difamación al titular de la Defensa Nacional. Comunicados de prensa, conferencias con gestos adustos y desmentidos, en medio de un cúmulo de calificativos de un lado hacia el otro, dejaron en claro que el remedio, por ahora, «ha sido peor que la enfermedad»

¿ Como ha observado toda la situación generada tras las palabras del Ministro de Defensa sobre la existencia de una «mafia blanca» y las apreciaciones realizadas por la dirección nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas con respecto a la instalación del Instituto de Medicina Altamente Especializado – Imae?

En principio nos ha sorprendido la liviandad con la que el Ministro (de Defensa Nacional) ha generalizado opiniones sobre el colectivo médico. De alguna manera denuncia o pone en tela de juicio la confianza necesaria que se debe tener en el médico y en la profesión médica para desarrollar los procesos asistenciales. De alguna manera incurre en falsedades porque lo hace además en base a una supuesta oposición de los médicos a la instalación del Centro Cardiológico en el Hospital Militar cuando es sabido y además los hechos lo demuestra que si hay oposición frente a la instalación de ese centro, esa oposición se genera dentro del propio gobierno y dentro de quienes del punto de vista técnico asesoran al Fondo Nacional de Recursos y al propio ministerio sobre la oportunidad y la pertinencia de la instalación de un Centro cardiológico y de cirugía cardíaca en el Hospital Militar.

¿Con esa oposición dentro del propio gobierno se refiere la propia Ministra de Salud Pública, Susana Muñiz y al actual vicepresidente de ASSE, Enrique Soto, quienes han sostenido la necesidad de instalar un IMAE al norte del rio Negro?

Sobre todo a quienes asesoran y tienen la información. Es decir lo que nosotros decimos es que el ministro se apoya en una supuesta oposición que no existe desde el punto de vista médico o al supuesto poder que podríamos tener los médicos para detener determinado proceso cuando en realidad la oposición o las opiniones contrarias a la instalación del Imae en el Hospital Militar están dentro del propio gobierno, es decir, está dentro de ASSE, está dentro del Fondo Nacional de Recursos, está dentro del ámbito académico, es decir que lejos estamos los médicos de generar una suerte de conducta mafiosa como nos ha endilgado el señor ministro para resolver los temas. Nosotros creemos que estos temas se deben resolver técnicamente. Cuando la política contamina estas decisiones se generan estos problemas y lamentablemente eso se agrava por expresiones que agravian al colectivo médico como las que utilizó el ministro. Con respecto a lo que han sido las últimas intervenciones de algunas personas, si hay alguien que no tiene parte en esto es el Sindicato Médico del Uruguay y nos sentimos con la responsabilidad necesaria y con la credibilidad necesaria de hacer nuestros planteamientos y manifestar nuestras dudas porque no tenemos ningún interés en esto a diferencia de otros que tienen una suerte de conflicto de interés al plantear determinados temas porque la instalación o no de este tipo de cosas está relacionado con personas que buscan de alguna manera obtener un rédito desde el punto de vista económico o profesional.

¿Y político?

Eso no lo vamos a saber hasta que evidentemente esta situación se dilucide. Para el Sindicato Médico no parece una cuestión lógica (la instalación de un IMAE en el Hospital Militar) teniendo un centro ya instalado con capacidad para desarrollar las cirugías que la capital precisa, duplicar esfuerzos, servicios, estructura como así también gasto, generando otro. Distinto es si nos ponemos a pensar en la posibilidad de generar un polo de desarrollo de la cirugía cardíaca al norte del rio Negro donde sabemos que las posibilidades de acceso a este tipo de cirugía se ven comprometidas por los tiempos de traslado. Por lo tanto nosotros damos una opinión que se sustentan en aspectos técnicos vinculados a la posibilidad de la instalación de un IMAE y lo damos por fuera de toda posición política y por fuera de toda posición que genere algún conflicto de intereses. El Sindicato Médico no forma parte de esto y no va a trabajar en este tipo de centro y por lo tanto nos sentimos con la libertad necesaria para opinar a diferencia de otros que salen en conferencias de prensa pero que de alguna manera están o son partícipes del éxito o del fracaso de este tipo de proyectos.

A propósito de lo que fue la conferencia del Director de Sanidad Militar, Guido Manini Rios y de Mauricio Cassinelli, por allí ellos han salido al cruce a quienes afirman que el IMAE estará dirigido por cirujanos cardíacos comunistas. ¿Sobre ese punto en particular que opina usted?

Nosotros nos basamos en aspectos técnicos, epidemiológicos y de viabilidad de las estructuras a instalarse.

¿Y por qué cree que no se instala el IMAE en el interior entonces?

Eso habría que preguntarles a quienes toman la decisión final (…) en donde los centros de referencia y calidad deben ser instalados para lograr una mayor equidad y un mayor acceso a la población. Yo creo que si todos nos preguntamos o si analizamos desde el punto de vista lógico donde tiene que ocurrir y analizando las patologías cardiovasculares que requieren un tiempo de traslado no mayor a dos horas en algunos casos para poder tener un resultado satisfactorio desde el punto de vista asistencial, no solo los médicos sino cualquier persona con un sentido común estaría respondiendo la pregunta de dónde debe instalarse un nuevo centro de cirugía cardíaca. (…) Estamos hablando de la realización de angioplastias, incluso de cirugías cardíacas. Una vez que se produce el evento cardiovascular requieren un tiempo máximo de resolución que en una proporción grande de los casos no debe superar las dos horas y eso hace que si no se actúa en ese tiempo el proceso asistencial y la evolución se torna más grave o con complicaciones. Eso está demostrado en los números que el Fondo Nacional de Recursos muestra en la cual arroja que la población al sur del rio Negro tiene mayor accesibilidad a este tipo de patologías que los que viven al norte del rio Negro. No es que quienes viven en el norte del rio Negro se enferman menos o tienen menos patologías, sino que no pueden acceder por este tipo de limitantes sobre los tiempos de traslado para realizar determinados tratamientos que al no haber centros de referencia que puedan resolverlo en ese plazo generan este tipo de inequidades. (Nosotros) apoyamos el fortalecimiento del sector público para la realización de procedimientos de alta complejidad, lo que estamos planteando es que la lógica la tecnología y los aspectos técnicos demuestra que esto tiene que hacerse al norte del rio Negro y no generando un lugar donde ya existe uno con posibilidades de resolver las patologías cardiovasculares.

Su postura está en línea con la del Vicepresidente de ASSE, Enrique Soto y la ministra Muñiz

Totalmente en ese sentido.

La pregunta es, si esto es una cuestión tan evidente o necesaria como algunos plantean, seguramente ya se hubiera instalado el Centro de Cirugía Cardíaca en el hospital Militar.

¿Por qué cree que el ministro no hace la denuncia por la existencia, según él, de una mafia blanca en el sector?

Porque se resguarda en sus fueros o humanidad como ministro para poder agredir desde el punto de vista general sin necesidad de aportar pruebas para ello. La agresión lo que muestra es una falta de conocimiento o contenido en el discurso vinculado a la salud. Como ministro de defensa, creo que difícilmente pueda estar ocupándose de los problemas de salud y teniendo una concepción ideológica clara y conocimiento claro de lo que es el sistema sanitario en Uruguay.

¿El Sindicato Médico realizará la denuncia ante las apreciaciones de Fernández Huidobro?

La estamos analizando pero lamentablemente nuestro país permite que un ministro pueda tener este tipo de agresiones sin que deba responder ante la justicia o juzgado. Lo que si esperamos es que es señor ministro se retracte de sus apreciaciones y sino que demuestre lo que está haciendo.



Adrian RAVIER
Licenciado en Economía, máster en Economía y Administración de Empresas y doctor en Economía. FUENTE: Infobae

Recuerden que el socialismo es imposible

Si algo tienen en común los partidarios del **socialismo** y la **economía pura de mercado** es su crítica a las inconsistencias del capitalismo intervenido. El **intervencionismo** que se viene aplicando, gobierno tras gobierno, sólo suma parches que atienden a cuestiones «urgentes», pero nunca resuelven los problemas de fondo, las cuestiones «importantes». Los socialistas, sin embargo, fallan en dos aspectos centrales: primero, en diferenciar el sistema capitalista «puro» -como lo han entendido y defendido **Adam Smith** y **Friedrich Hayek**-, del sistema capitalista «intervenido» -con los parches propuestos por **John Maynard Keynes** y **Paul Samuelson**-; segundo, en comprender que **»el socialismo es imposible**», como han demostrado **Ludwig von Mises** en su artículo de 1920 y su libro 1922, y **Friedrich Hayek** en distintos documentos de los años 1930 y 1940, con un argumento que continúa sin respuesta, pero que muestra su validez en el fracaso de las distintas formas de socialismo en toda **Europa**, y ya casi podemos decir en todo el mundo.

En este artículo sólo podré concentrarme en este último punto, el que ha sido tratado ampliamente en un libro del catedrático español **Jesús Huerta de Soto** titulado ***»Socialismo, cálculo económico y función empresarial»***. El libro cuenta con más de 400 páginas, pero el lector puede acceder a una reseña que personalmente escribí sobre este debate, y que fuera publicado en la revista ***Cuadernos de Economía*** (Vol. 30, Nº 54), de la **Universidad Nacional de Colombia**. El argumento básico explica que en un mundo de incertidumbre y conocimiento disperso, la **propiedad privada** es necesaria para dar lugar a los precios, pues sólo ellos pueden permitir a los empresarios advertir de ganancias y pérdidas en sus proyectos de inversión, y con ello asignar con relativa eficiencia los recursos escasos. Más en limpio, si no tenemos propiedad privada de los medios de producción, no tenemos mercados para esos medios de producción. Sin mercados para esos bienes de producción, no habrá precios. Sin precios, los empresarios no pueden advertir si sus proyectos de inversión son rentables. Si algo funciona -aún en el **capitalismo intervenido**- es precisamente ese **proceso de prueba y error**, en donde los empresarios van probando distintas inversiones, y **sólo cuando son rentables, los proyectos se mantienen.** Ganancias y pérdidas contables representan una información en el mercado acerca de si estamos asignando bien o mal los recursos. Y vale recordar que esos resultados son consistentes con la soberanía del consumidor, donde gana el que sabe satisfacer las necesidades del consumidor, y pierde el que no logra la demanda de sus consumidores. El socialismo propone terminar con la propiedad privada, terminar con estas señales de mercado, terminar con la función empresarial y reemplazar todo ello por la**propiedad pública de los medios de producción**. Aquí se abren un abanico de opciones, pero nunca ha quedado claro qué es lo que en definitiva proponen los socialistas. Y el problema es que **el propio Marx careció de una propuesta concreta de cómo funcionaría el socialismo.** De un lado, se propone que el gobierno administre públicamente esos medios de producción, como de hecho ocurrió en **Alemania Oriental**, en **Rusia** o actualmente es en **Cuba**. Aquí los problemas son al menos dos. Primero, como señaló el **Premio Nobel en Economía James M. Buchanan** –recientemente fallecido- el gobierno puede no tener los mejores incentivos para administrar «solidariamente» estos recursos. Si asumimos que los individuos siempre persiguen su **propio beneficio**, ¿por qué vamos a suponer que las personas que lleguen al poder van a tender a interesarse por el **»bien común»**? **Buchanan** insistía en que lo más probable es que estas personas tiendan siempre a alejarse de ese »bien común» y persigan más bien su propio beneficio y de aquellos a quienes representan, o que han financiado sus campañas electorales. Cuando uno mira la **Argentina**, ¡cuánta razón tenía!



El segundo problema fue mencionado por otro premio Nobel en Economía, en este caso,**Friedrich Hayek**. Si aceptamos que el problema económico consiste en advertir cuáles son los bienes y servicios que deben producirse, en qué cantidad y calidad y de qué manera distribuirlos, debemos comprender que ese «conocimiento» no es dado a nadie en particular. Los bienes y servicios que necesitamos producir son los que la gente quiere. Y ese conocimiento está disperso en la sociedad, en las preferencias individuales de cada sujeto, en la forma de bits de información que cada uno tiene en su propia mente. ¡Es información no revelada! Salvo que permitamos que la gente demande y comunique esa información a los empresarios a través de los precios, precisamente.

Los socialistas del siglo XXI han dado un paso atrás. Ahora se hacen llamar «socialistas de mercado», y afortunadamente han dejado de sugerir la propiedad pública de los medios de producción. En realidad se han dado cuenta de que nada es mejor que permitir que la producción de bienes y servicios la lleve adelante el mercado, lo que se traduce en alimentos, ropa y todo tipo de bienes y servicios en calidad y bajos precios, lo que es resultado precisamente del proceso competitivo. La discusión ahora se resume al **rol del Estado**. El «socialista de mercado» o aquellos que buscan un mayor **»Estado de bienestar»** piden un Estado que, paradójicamente, «intervenga», que ofrezca «bienes públicos», que evite o minimice «externalidades negativas» y subsidie las «externalidades positivas». Que aplique «**políticas antimonopólicas»** y «redistribuya los ingresos» de manera conveniente. Lo que no han advertido aún es que **ese Estado al repartir la torta se queda con una porción enorme de la renta para beneficio propio,** lo que impide la reinversión de quienes la generan -creando potenciales puestos de trabajo- y dejando a las clases más desfavorecidas sin salida.

Dirán algunos pocos socialistas que este «socialismo de mercado» no es socialismo. Yo estoy de acuerdo. Dirán otros socialistas que la propuesta ideal tampoco es la propiedad pública de los medios de producción, sino **la propiedad «comunal» de los medios de producción**. En este caso se trataría de **pequeñas comunidades de personas que manejarían las «empresas»**, y nótese que estas comillas no son arbitrarias. En tal caso las preguntas sin respuesta son cuantiosas. ¿Cómo se distribuyen los ingresos de esta empresa? Se dirá, quizás, que se lo hará igualitariamente, según las horas trabajadas. ¿Ganará lo mismo un ingeniero que un obrero? ¿Qué incentivo tendrá el ingeniero para capacitarse si finamente sus ingresos serán iguales? ¿Qué incentivo tendrá un obrero para trabajar eficientemente si los otros obreros no lo hacen? «**Conocimiento» e «incentivos» son los dos grandes problemas del socialismo**. Dejemos el socialismo para otro mundo. ¡Y por favor, dejemos de destinar tinta a un debate acabado!

■

Revancha y asedio

Julio María SANGUINETTI
Periodista. Abogado. Presidente de Uruguay 1985/1990 y 1995/2000. FUENTE: diario Correo de los Viernes



La justicia uruguaya continua bajo asedio. Ahora un relator de Naciones Unidas acaba de exigirle a nuestra Suprema Corte de Justicia —sin autoridad alguna— que modifique su criterio sobre la inconstitucionalidad de la disparatada ley que dejó sin efecto los alcances de la ley de caducidad. Esa ley, según ha sostenido el Dr. Hebert Gatto en reciente columna, «desconoció el principio de libertad (lo no prohibido es lícito), soslayó la cosa juzgada y omitió el principio conexo de legalidad (solo la ley puede limitar derechos)». En una palabra, concluye, ignoran «ochocientos años de garantías jurídicas».

Estos burócratas internacionales llegan por iniciativa de nuestro gobierno (abierta o solapadamente) y mantienen así vivo el acoso a un poder del Estado que ha sufrido una asonada aún no juzgada, visitas de Ministros del Poder Ejecutivo para cuestionar sus fallos y hasta aquella insólita recusación que cinco Fiscales formularon contra los miembros de la Suprema Corte de Justicia: uno que había expresado un criterio procesal sobre el tema de la discutida ley y otros cuatro que ni siquiera habían abierto la boca . No hay precedentes de algo así y es notorio que esos Fiscales actúan corporativamente y han resuelto autoerigirse en la espada inflamada de un revanchismo que tramposamente se envuelve en la bandera de la Justicia.

Todos los días se sigue invocando el derecho internacional cuando éste es clarísimo: el Estatuto de la Corte Penal Internacional (artículos 11 y 24) dice que sus normas se aplicarán a hechos posteriores a su vigencia y que nunca habrá retroactividad en los delitos. Justamente, ese es el caso: los dramáticos episodios de la época de la dictadura ocurrieron antes de ese Estatuto. En cuanto al siempre recordado Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 7°, numeral 2, es claro en prohibir toda acción retroactiva y este también es el caso, pues se pretende aplicar una categoría de delitos (lesa humanidad) entonces inexistente.

Nuestros jueces máximos han actuado conforme a derecho, más allá de la idea y convicción que cada uno pueda tener. No podían hacerlo de otro modo y, como dice bien Gatto, enterrar la historia de la libertad.

En cualquier caso, todos quienes construyen esta ola revanchista ignoran sistemáticamente dos aspectos fundamentales: 1) que nuestra Suprema Corte de Justicia posee competencia originaria para interpretar nuestra Constitución y que ninguna norma internacional está por encima de ella, ya que no se acepta la supranacionalidad; 2) que hubo dos pronunciamientos de la ciudadanía ratificatorios de la tan discutida ley de caducidad y que solo alguien que no es demócrata, por fascista o comunista, puede ignorar ese pronunciamiento del órgano máximo del sistema democrático, que es el cuerpo electoral.

Olímpicamente se desconoce también que esa discutida amnistía a los militares fue parte de un proceso de pacificación que comenzó con una amnistía a quienes habían intentado por medio de la violencia derribar la institucionalidad democrática. Y que se acompañó con una ley de reparación que devolvió cargos a funcionarios destituidos y millonarias indemnizaciones que se pagaron a víctimas de abusos o familiares de ellos. Todo se hizo bajo el espíritu de reparar —o compensar— lo reparable y alcanzar un estado de pacificación que fuera la garantía real y efectiva de que el país no caería nunca más en los excesos del pasado. A 28 años del retorno democrático, sin que se hayan se producido rebrotes militares o guerrilleros, nadie podrá discutir la eficacia de las leyes de amnistía, que lograron plenamente su propósito. Con apoyo comprobado de la ciudadanía, además.

Las amnistías, histórica solución final a los sangrientos enfrentamientos de nuestra historia, fueron y son naturalmente discutidas y discutibles. Se trata de una solución racional a un tema pasional. Lo importante es si logran su objetivo pacificador, como es cumplidamente en el caso.

Eso no implica detener la búsqueda de la verdad o el rastreo de cadáveres de personas fallecidas, cosa que la ley de caducidad expresamente previó. Lo que sí dispuso —con dos ratificaciones de la ciudadanía— fue terminar con los juzgamientos, del mismo modo que se dieron por precluidos los juicios por los numerosos crímenes cometidos por los guerrilleros y por los que nadie fue condenado.

Quienes estuvimos sin vacilación alguna en contra de la violencia antidemocrática de los movimientos subversivos y —con la misma convicción y constancia— en contra de la dictadura, no cedemos a nadie la derecha en la defensa de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Por eso contribuimos en su tiempo a la pacificación del país y hoy nos rebelamos ante el acoso a que se somete a la Corte de Justicia, nos indignamos ante pronunciamientos legislativos descaradamente inconstitucionales y no aceptaremos jamás que se instale la idea de que haya norma alguna por encima de la Constitución de la República. ■



Jorge BATLLE
Abogado. Periodista. Presidente de la República (2000-2005) Fuente: facebook



¿Cuándo te vas a avivar?

Es el canto más popular de hoy día. Se lo cantan a mucha gente pero nadie lo merecería tanto como la Intendenta de Montevideo.

Primero, y en plena felicidad, destruyó la Avenida Garzón. A medida que iba realizando el proyecto gente del transporte, vecinos, opiniones de distintas personas aparecían en la prensa, en la página de los lectores, en los interrogatorios de losperiodistas, y todos alertaban, eso no funciona, eso será un desastre.

Siguieron adelante. Empecinados. Sabían todo. Eran los nuevos hacedores del programa vial de Montevideo. Lo consiguieron. Destruyeron Garzón!.

Recuerdo un día venía del Aeropuerto de Melilla en un taxímetro que tiene su parada en Colón y le pregunté ¿este chorizo funciona?.

Veníamos por Garzón y me dijo: fíjese y había ómnibus por adentro y ómnibus interdepartamentales por afuera, y de pasada, me hizo varias observaciones prácticas, propias de una persona que todos los días anda por ese lugar y que hubiera sido un mejor consejero para la Intendencia que el genio que ella tuvo que echar.

Pero no lo echaron por Garzón, lo echaron por General Flores. Comenzaron a destruir Gral. Flores después del Regimiento de Blandengues y ya llegaron con esa sistemática destrucción hasta Camino Mendoza. A esa altura se dieron cuenta del terremoto que estaban organizando, le pidieron la renuncia al genio e incorporaron al Sr. Campal, que luce, por su apellido, porque no lo conozco, pero ha de ser pariente de Esteban Campal, como un hombre más sensato que fue a la Junta Departamental y dijo: vamos a cambiar todo.

Esto quiere decir que también pararon el problemático desarrollo que estaban armando en el viejo camino Cuchilla Grande, hoy llamado Belloni, y detuvieron para siempre la catástrofe que estaban organizando en Avda. Italia.

Es absolutamente cierto, hay que ver cuándo se van a avivar porque darse cuenta de lo que estaban haciendo ya en la primera transformación, que toda la gente que le advirtió lo que le iba a pasar, haberlo hecho y encima haber repetido la cosa en muchas peores condiciones en una avenida abierta y sin problemas como Gral. Flores, demuestran, que al igual que los que les pasa en lo nacional, se precisa, por lo menos, tener un poco de sensatez para poder gobernar.

Pero todo es igual. Fíjense la trilogía del Presidente Vázquez: No me ocupo de la seguridad porque los delincuentes nacieron bajo la Presidencia de los Presidentes de los Partidos Tradicionales; se que la salud anda mal porque por suerte tengo un hijo médico (se ve que cuando dijo eso había dejado él de ser médico), la educación anda mal, afirmó, pero es porque no se aplicó la Ley que yo voté.

¿No encuentran estos razonamiento parecidos a los del inventor de Garzón y de Gral. Flores?, ¿no habrán tomado la misma píldora para tanta eficiencia?.

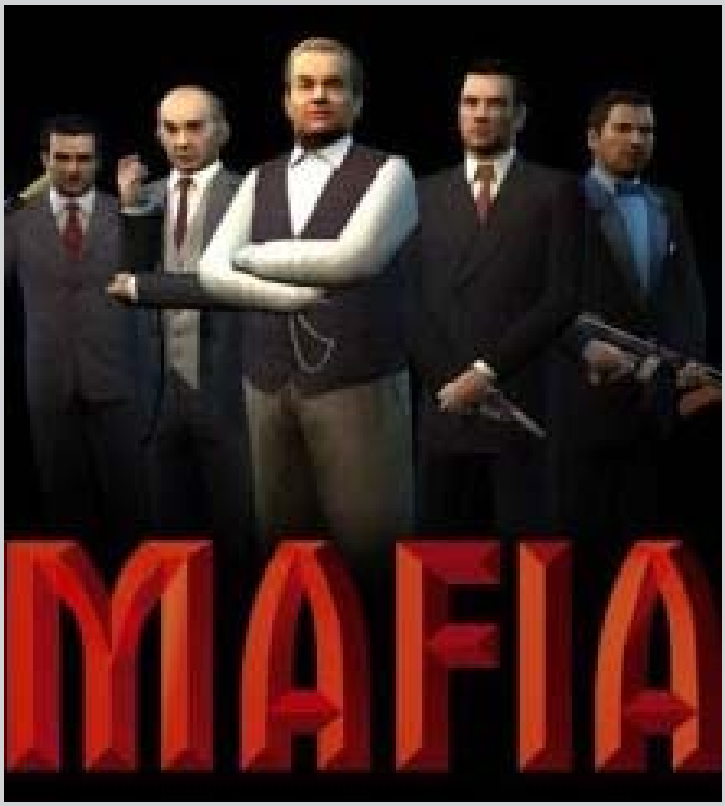
Eureka, por lo menos saben que el mundo es redondo, algo han adelantado. ■



Jorge AZAR GÓMEZ
Ex Representante de Uruguay ante ONU

La mafia argentina

El célebre tratado de Von Clausewitz «Sobre la Guerra» recuerda que la primera obligación de todo gobernante o estratega consiste en identificar, cuantificar y evaluar al enemigo.
Si el gobernante o estratega no sabe cuál es su posición, quién es, con qué herramientas cuenta, cuál es el daño que puede hacer el enemigo a su país y a sus gobernados, tiene la batalla perdida antes de comenzar.
Cuando el Presidente José Mujica, al asumir su mandato, inició sus contactos con su par argentina Cristina Fernández para solucionar los diferendos entre las dos naciones, quien esto escribe afirmó en reiteración que los mismos no se solucionarían teniendo en cuenta los personajes que integran el equipo ejecutivo del gobierno de Buenos Aires. No obstante, consideró que Mujica sabía a quién se enfrentaba. Especialmente teniendo en cuenta sus afirmaciones en el tan comentado reportaje contenido en el libro «Pepe Coloquios».
Es que, releyendo en su momento dicho reportaje, y ahora en primera persona, di mayor importancia a la opinión que tenía el mandatario uruguayo, sobre todo porque supo expresarla en forma pública. Se refería a los Kirchner y a los peronistas en general.
Creí que, por estos días, Mujica -al verse obligado a negociar el aumento de la producción de UPM con la presidente argentina- recordaría sus propios conceptos sobre el matrimonio Kirchner. A Néstor y Cristina, José Mujica los definía como: «peronistas... (...) y los peronistas, son patoteros».
Declaró también: «Los Kirchner son de izquierda: peor, mamma mía: una patota», reafirmando que procedería a encaminar las negociaciones de acuerdo a las sugerencias de la obra del prusiano Clausewitz, que sabemos Mujica estudió y analizó a conciencia.
Siguiendo su diálogo con el periodista (que, grabador en mano, no salía de su asombro) el hoy jefe de estado uruguayo le explicaba su estrategia para negociar en Argentina y la defendía con firmeza: «En la Argentina, tenés que ir a hablar con los delincuentes peronistas, que son los reyes. Son tipos que están ahí y tienen el poder: son verdaderos señores feudales».
Podríamos continuar por horas con el análisis serio que Mujica elaboró en la entrevista, pero hoy es fácil concluir que estas dos citas sirven de argumento para percatarnos de que el presidente de la República Oriental del Uruguay se ha equivocado en la estrategia utilizada para lidiar con el gobierno argentino. Se olvidó, pues, de elaborar un curso de acción para enfrentarse en las negociaciones a los «delincuentes peronistas».
Como resultado de este «olvido» de Mujica respecto de las cualidades morales y éticas de sus amigos, Uruguay se encuentra ahora soportando el embate permanente de la reconocida política peronista de: «primero un sopapo, y después una caricia». Así lo traen al presidente del Uruguay: a



sopapo limpio y a los mimos. Puesto que, desde la otra orilla, ellos nos analizan y deciden: «Al Pepe dale con todo, igual, si tiene los zapatos embarrados, nosotros le embarramos la dignidad».
Señor Presidente: en varios escritos, supe expresarle mi sugerencia para que no cruce más el río. Se dio lo previsto: lo recibieron con un abrazo, le hicieron un mimo y lo despidieron con un sopapo. El problema es que somos los uruguayos quienes recibimos ese sopapo en nuestra propia mejilla y, -téngalo usted bien claro, no estamos dispuestos a poner la otra.
Para colmo, usted dio rienda suelta para que a la «vieja terca» le entregasen -vaya despropósito- las llaves de la ciudad de Montevideo.
La pasada semana, usted, presidente, recibió agravios del Canciller argentino, ofensas y afrenta de corte mafioso. Prácticamente el canciller Timerman pide su cabeza para juzgarlo por intento de homicidio. Obviamente, esto es una revancha, en respuesta a su decisión de autorizar el aumento de la producción de UPM.
Una cancillería seria (la nuestra claramente no lo es) hubiese elevado en ese mismo momento una carta protesta al gobierno argentino por los agravios recibidos.
Ni usted ni nuestra cancillería procedieron con firmeza al permitir el ultraje, error multiplicado al responderle usted directamente al canciller argentino. No corresponde.
Proceda con firmeza y dignidad, Señor Presidente, y verá cómo los uruguayos volveremos a reconocer que usted es el presidente de todos los uruguayos... y no solo de unos pocos.
El miércoles 9 de octubre , el canciller argentino Timerman, envió otro mensaje mafioso a Mujica expresando que : «Le mandamos dos mensajes a Uruguay, este es el tercero» , »Voy a esperar un par de días antes de ir a La Haya» , le faltó expresar a Timerman : « Mujica o te retractas de la autorización para aumentar la producción de UPM , o te mando a los de la Cámpora para que te quiebren los dedos y los brazos, así nunca más firmás resoluciones».¿Cual va a ser la respuesta de nuestra cancillería? , ¿ seguirá en su anestésico y sumiso silencio ?.
Si usted cree verdaderamente que su equipo de asesores no se encuentra en condiciones de apoyarlo, y que le originará una merma en su capacidad negociadora, dígnese a convocar a los ex presidentes Sanguinetti, Lacalle, Batlle y Vázquez. Ellos -con sentido patriótico- explorarán junto a Usted los mejores argumentos y estrategias para negociar con la «mafia» argentina.
Ellos ya lo hicieron.
Recuerde sus palabras, Señor Presidente José Mujica, sobre los Kirchner y sobre los peronistas: mafiosos, delincuentes, patoteros, señores feudales. En base a estos conceptos, elabore un plan para hacer frente a su enemigo, y siempre tenga bien presente el tratado de Clausewitz «Sobre la Guerra». En especial cuando invita a identificar, cuantificar y evaluar al enemigo.
A último momento se supo que la Argentina, lejos de buscar una salida al conflicto generado por la autorización concedida a UPM para aumentar su producción, profundizó el diferendo, al difundir informes medioambientales tendenciosos sobre la supuesta contaminación del río Uruguay, delegando una presidencia muy poco seria y acéfala el emplazamiento al gobierno del Uruguay por un muy venido a menos canciller.

■

«Creí que, por estos días, Mujica -al verse obligado a negociar el aumento de la producción de UPM con la presidente argentina- recordaría sus propios conceptos sobre el matrimonio Kirchner. A Néstor y Cristina, José Mujica los definía como: «peronistas... (...) y los peronistas, son patoteros». Declaró también: «Los Kirchner son de izquierda: peor, mamma mía: una patota», reafirmando que procedería a encaminar las negociaciones de acuerdo a las sugerencias de la obra del prusiano Clausewitz, que sabemos Mujica estudió y analizó a conciencia...»

De noviembre a noviembre

Michelle, Dilma, Evo, y los otros...

Lorenzo AGUIRRE
Periodista. Escritor. Asesor Cultural,
Director de Orquesta



De ahora en más, y hasta el mes de noviembre de 2014, el continente se verá desbordado y sacudido por las elecciones nacionales que diferentes países llevarán adelante, presentando a sus correspondientes ciudadanos la posibilidad de decidir el rumbo que aspiran. Desde las próximas presidenciables en Chile – el 17 de noviembre del año en curso-, con la oportunidad de regreso a La Moneda por parte de la socialista Michelle Bachelet, pasando por Brasil, que, el 2014 tendrá sus comicios -vislumbrándose una reelección de Dilma Rousseff-, para continuar con la convocatoria popular en Bolivia, en la cual Evo Morales estará habilitado para ser reelecto, hasta Juan Manuel Santos, que se encuentra en plena campaña, siendo favorito en Colombia. Finalmente, nuestro país, que emitirá su sentir dentro de un año, elección que permitirá a los uruguayos manifestar si continúa, o no, el gobierno de izquierda, reafirmando de esta forma su posición e interés no solo en el acontecer nacional sino en la región. La lucha por el poder será férrea en todos los países, y de acuerdo a los resultados quedará asentada en buena medida, en forma de bloque, una estructura de gobierno que pautará un perfil social, económico, y cultural, para la segunda mitad de la actual década.



La exmandataria Michelle Bachelet es la firme candidata por la coalición de izquierda «Nueva Mayoría» -para las elecciones chilenas del próximo 17 de noviembre-, aunque no contaría con el cincuenta por ciento de los votos, respaldo que necesita para ganar en la primera vuelta.
Bachelet, de sesenta y un años de edad, de profesión médica pediatra, se desempeñó primeramente como Ministra de Salud -bajo el gobierno de Ricardo Lagos -, luego Ministra de Defensa, hasta llegar a La Moneda en el 2006, convirtiéndose en la primera mujer presidenta en la historia chilena, tirando por tierra muchos prejuicios de una sociedad en gran parte conservadora que, en buena medida no comulgaba con una mujer agnóstica, madre soltera, y también separada.
Luego que venciera con un cincuenta y tres por ciento de los votos al derechista Sebastián Piñera, hoy, Bachelet, se encuentra a tres semanas de las elecciones contando con una intención de voto aproximado al treinta y seis por ciento, seguida por la candidata de la derecha oficialista Evelyn Matthei, con veintitres por ciento, y más atrás por el liberal economista independiente Franco Parisi, para quién la intención de voto rondaría el dieciseis por ciento.
De ganar Bachelet, pondría en marcha su propuesta sobre reforma tributaria, una gratuita educación universitaria, y modificar la Constitución, dejando de lado la que viene desde los tiempos de la dictadura de Pinochet.

Dilma, en busca de reelección

Por su parte, la mandataria brasileña Dilma Rousseff lidera cómodamente la intención de voto, manejándose una cifra que oscila en el treinta y seis por ciento al día de hoy, y se espera un alza importante de aquí a las elecciones que se llevarán a cabo el 5 de octubre del próximo año. En caso que no se llegara al cincuenta por ciento de los votos, se iría a una segunda vuelta. Además de la puja nacional estarían en juego 27 gobernaciones regionales, como también cada asiento en diputados, y un tercio de la Cámara de Senadores.

Evo, por un tercer mandato

El presidente de Bolivia – que estuvo en visita oficial en Buenos Aires, y ha señalado que los presidentes de la región deben «acelerar la integración sudamericana»- va en busca de un nuevo período, en las elecciones del próximo año.
La Constitución prohibe una tercera presidencia, pero el gobierno manifiesta que, la primera no debe ser tenida en cuenta porque fue anterior a la Refundación de Bolivia, y entonces todo empieza en el año 2009. Por tanto, Evo Morales estaría habilitado en los próximos comicios de 2014, para ser reelecto.
Morales habló de unificación latinoamericana -al igual que Chile-, pero resulta que, entre ellos existe el conflicto marítimo -la salida al mar para Bolivia-, y Evo Morales se queja ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, para que, ésta, se pronuncie.
Hasta el momento, Chile, a través de su presidente Sebastián Piñera ha respondido que su país no tiene en su agenda temas limítrofes con Bolivia.
En caso que Michelle Bachelet asumiera en La Moneda, veremos que posición toma en un problema que, sin lugar a dudas, es primordial.

Santos, y Vázquez

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ya está en plena campaña electoral, y sería el favorito, el próximo año.
Santos, ha reiterado su posición de acercamiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), en busca de una flexibilidad en el tratamiento de «cambios sustanciales».
Para finalizar, el expresidente uruguayo Tabaré Vázquez es la figura indiscutida de la coalición de izquierda Frente Amplio para las elecciones de noviembre de 2014, en la cual buscará el tercer período de gobierno para ese partido político.

Gobiernos en bloque

A esta altura de la «historia» debemos tener muy claro que los acontecimientos políticos ya han dejado de ser individuales, exclusivos de un país, y lo que sucede forma parte de un conjunto de emprendimientos llevados adelante por grupos de personas que tienen las mismas pasiones, e iguales estructuras y conceptos de gobierno.
Hace apenas menos de seis meses, el representante de izquierda Rafael Correa asumió su segundo mandato como Presidente de Ecuador, luego que obtuviera en la primera vuelta más del ochenta por ciento de respaldo popular.
Por otro lado, Venezuela tiene a Maduro, con su posición pro Cuba, a un gobierno colombiano que – como señalamos- entabla «acuerdos» con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y a todo esto debemos sumar la posición de Dilma Rousseff, Cristina Fernández, y José Mujica, con sus sabidas ideologías.
Entre la gran cantidad de «cosas» que buscan estos gobiernos de izquierda se encuentra sin lugar a dudas el crecer juntos para bloquear la relación – y en alguna medida la intromisión- norteamericana, ese imperialismo que tanto aborrecen pero que, a la hora de los negocios, mantienen vínculos «cargosos» y llenos de adulonería -como Venezuela- para que el sistema capitalista - consumista – que «destruye al hombre»- le siga comprando por día el millón de barriles de crudo.
Otra de las «cosas» que está en los planes de dichos gobiernos, es la unión latinoamericana, siempre y cuando todos piensen de igual forma, porque de lo contrario les ocurrirá lo que sucedió con Paraguay, que fue separado del bloque Mercosur.
Pero...¿de cuál unión latinoamericana están hablando?
La Vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de Perú, reaccionó violentamente señalando que retira a su Embajador en Caracas por la injerencia de Venezuela, mientras que Bolivia demanda a Chile ante La Haya, Uruguay es frenado por el Mercosur por su interés de integrar la «Alianza del Pacífico», y Argentina nos pone trabas comerciales, para culminar con un Brasil que mira para otro lado.
Si realmente nos despojamos de los «colores», y vemos la realidad, podemos percibir en «esencia», lo auténtico, lo que realmente buscan algunos «señores», que, sin lugar a dudas no son lo que cada pueblo, cada grupo familiar, pide desesperadamente. ■



Ope PASQUET
Abogado. Senador. Ex Ministro
de Relaciones Exteriores

Seguridad Social y proyecto restaurador

En la semana que concluye, el Parlamento sancionó un proyecto de ley que en treinta artículos introduce varias modificaciones al régimen mixto de seguridad social, vigente desde 1996 por imperio de la ley 16.713.

El trámite legislativo fue ultrarrápido: quince días en el Senado, veinticuatro horas en Diputados. En esos plazos, ni los diputados ni los senadores pudimos estudiar a conciencia un proyecto técnicamente muy complejo, como suelen serlo los atinentes a la seguridad social. Para que el lector tengaun punto de referencia, cabe recordar que el procedimiento para la sanción de leyes de urgencia (Constitución, art. 168, nral. 7º), prevé que la Cámara que trata el proyecto en primer término disponga de 45 días para su estudio; el plazo es de 30 días para la segunda Cámara. Comparada con lo que fue el trámite dado a este proyecto, una ley de urgencia parecería una carreta de insoportable lentitud. Por lo visto, el Frente Amplio llegó a la conclusión de que es suficiente con que las leyes las estudie el Poder Ejecutivo; la mayoría oficialista se da por satisfecha con eso, y lo que piense o diga la oposición no importa, porque es minoría. Así funcionan las cosas hoy en el Parlamento.

Desde el punto de vista del contenido, la ley es heterogénea; regula varios temas, como el derecho a desvincularse de las AFAPs que se otorga a algunos trabajadores que se afiliaron voluntariamente a ellas; la incidencia del monto de las comisiones cobradas por cada Administradora en el mecanismo de asignación de afiliados, en defecto de una decisión expresa de éstos; y la constitución de un subfondo de retiro para disminuir el riesgo de las colocaciones (y por consiguiente su rentabilidad) cuando el afiliado se acerca a la edad de la jubilación.

Desde el punto de vista político, empero, lo sustancial no fueron estas disposiciones particulares, que corrigen y en algún aspecto buscan mejorar el régimen establecido por la ley 16.713; lo sustancial fue el discurso anti AFAPs con el que el asunto fue presentado a la opinión pública. El PIT-CNT y en particular uno de sus dirigentes principales, Marcelo Abdala, dijeron enfáticamente que la sanción de este proyecto de ley fue sólo un paso en el camino al gran objetivo, que es la eliminación de las AFAPs. El movimiento sindical las rechaza porque, sociedades comerciales como son, actúan con ánimo de lucro; el ánimo de lucro no debería tener cabida, según el Sr. Abdala y sus compañeros, en el ámbito de la seguridad social. No se dice con claridad qué se propone para sustituir a las AFAPs y al régimen de ahorro individual que ellas administran, pero está implícito en la crítica al sistema mixto hoy vigente, que lo que se busca es el retorno al régimen llamado de solidaridad intergeneracional, o de reparto, administrado sin fines de lucro por el BPS. O sea: lo que se quiere – aunque no se diga con todas las letras- es restaurar el sistema existente antes de la sanción de la ley 16.713.



Y bien: corresponde recordar que la ley 16.713 se sancionó para evitar la crisis del sistema de seguridad social, con el consiguiente impacto destructor sobre los jubilados, los pensionistas, las arcas del Estado y el país entero.

Ya a principios de los años sesenta, los estudios técnicos realizados por la OIT a solicitud de la CIDE señalaban que la combinación de nuestras generosas «leyes sociales» y la particular demografía uruguaya, comprometía el futuro de la seguridad social. En las décadas que siguieron, aquellas grietas en el muro relevadas por la OIT se fueron haciendo más grandes y más profundas. En 1989, los egresos totales del BPS representaban unos diez puntos del PBI; en 1994, eran ya quince puntos; había que actuar, y rápido.

El gobierno del Partido Colorado iniciado en 1995(segunda presidencia del Dr. Sanguinetti), se abocó de inmediato a la tarea. Con el respaldo del Partido Nacional y la oposición del Frente Amplio, se logró que la ley se sancionara ese mismo año, para entrar en vigencia al año siguiente. Se respetaron plenamente los derechos adquiridos (la ley no alcanzó a quienes tenían causal jubilatoria configurada a la fecha de su entrada en vigencia) y se estableció, para el futuro, un sistema mixto de reparto (BPS) y capitalización (AFAPs), que es el que hoy tenemos.

¿Qué resultados tuvo la reforma? Los egresos del BPS representan hoy menos de diez puntos del PBI; el gran ahorro en este campo generó un «espacio fiscal» que permitió financiar, entre otras cosas, el aumento de las asignaciones presupuestales a la educación pública (de 3,1 a 4,5% del PBI, es decir, una apenas una fracción del ahorro en el BPS). Las jubilaciones y pensiones se pagaron regularmente aún durante la terrible crisis del 2002. Las AFAPs tienen, en números redondos, 1.200.000 afiliados (casi el 90% de ellos, voluntariamente afiliados), y los fondos que administran suman unos 10.000 millones de dólares. De ese total, la tercera parte corresponde a los aportes vertidos por los trabajadores, y las dos terceras partes son intereses producidos por las colocaciones realizadas.

La reforma fue un éxito, lo que no quiere decir que haya sido perfecta. Como toda obra humana, tuvo errores y defectos que deben corregirse y omisiones que deben colmarse. Por eso el Partido Colorado votó a favor de los dos artículos que permiten optar por la desvinculación de las AFAPs, a afiliados a quienes pueda resultar más conveniente la jubilación por el antiguo régimen.

Pero una cosa es corregir errores o introducir mejoras, y otra muy distinta es pretender tergiversar los hechos y hacer, de una reforma a todas luces exitosa, un capítulo más de la letanía sindical contra los años noventa, pretendido origen de todos los males (el origen de todos los bienes, se sabe, es el gobierno «progresista», al que la Humanidad debe la invención del café con leche y el pan con manteca).

Precisamente para rechazar ese alegato retrógrado contra la reforma de la seguridad social, el Partido Colorado votó en general en contra del proyecto de ley (sin perjuicio, reitero, de haber votado a favor de los dos artículos que establecen el derecho a la desafiliación en ciertos casos).

Son más de 800.000 los afiliados que en algún momento podrán optar por salir de las AFAPs. Los dirigentes sindicales dirán lo que quieran en el terreno ideológico, pero cuando llegue la hora de elegir pensando en la jubilación, la inmensa mayoría de los trabajadoresoptará por quedarse en el régimen que defiende y multiplica sus ahorros. Más allá de las palabras, la conducta de las grandes mayorías será la mejor defensa y justificación de la ley 16.713.

■

Transparencia

Pedro BORDABERRY
Abogado. Senador



La adjudicación de los canales de Televisión Digital anunciada esta semana puso de manifiesto errores, desprolijidades y manejo poco serio y profesional.

Nada más y nada menos que el propio Presidente de la República expresó hace algunas semanas que no se debía asignar el canal precisamente a quien se lo terminó asignando.

Lo afirmó de una forma tajante y contundente.

Pues bien, pocos días después termina yendo contra sus propias palabras.

Lo hace expresando que no había estudiado el expediente a fondo (¿para qué habló entonces?) y que la comisión asesora que actuó tenía demasiadas potestades (¿para qué se las dio entonces?).

Resulta indudable que este accionar desprolijo le causará daños al Estado, que se sumarán a situaciones similares como la de Pluna o la del litigio con un contratista de fútbol.

Son sumas nada menores por demandas judiciales que los abogados del Estado, tan denostados por el propio Presidente tantas veces, deberán enfrentar.

Muchas veces se informa que los abogados del Estado no obtienen éxitos en los Juzgados. Cabe preguntarse si es culpa de ellos o de los jerarcas que actúan de esta forma.

Más allá de estas conclusiones que nos preocupan por el daño patrimonial que causan, hay algo que también llama la atención.

Es la falta de aplicación de mecanismos que profundicen la transparencia en los procesos y llamados licitatorios.

Durante mi estadía en los Ministerios de Turismo e Industria, durante el gobierno del Dr. Batlle, aplicamos algunos instrumentos que ayudan a enfrentar los problemas que hoy tiene el gobierno.

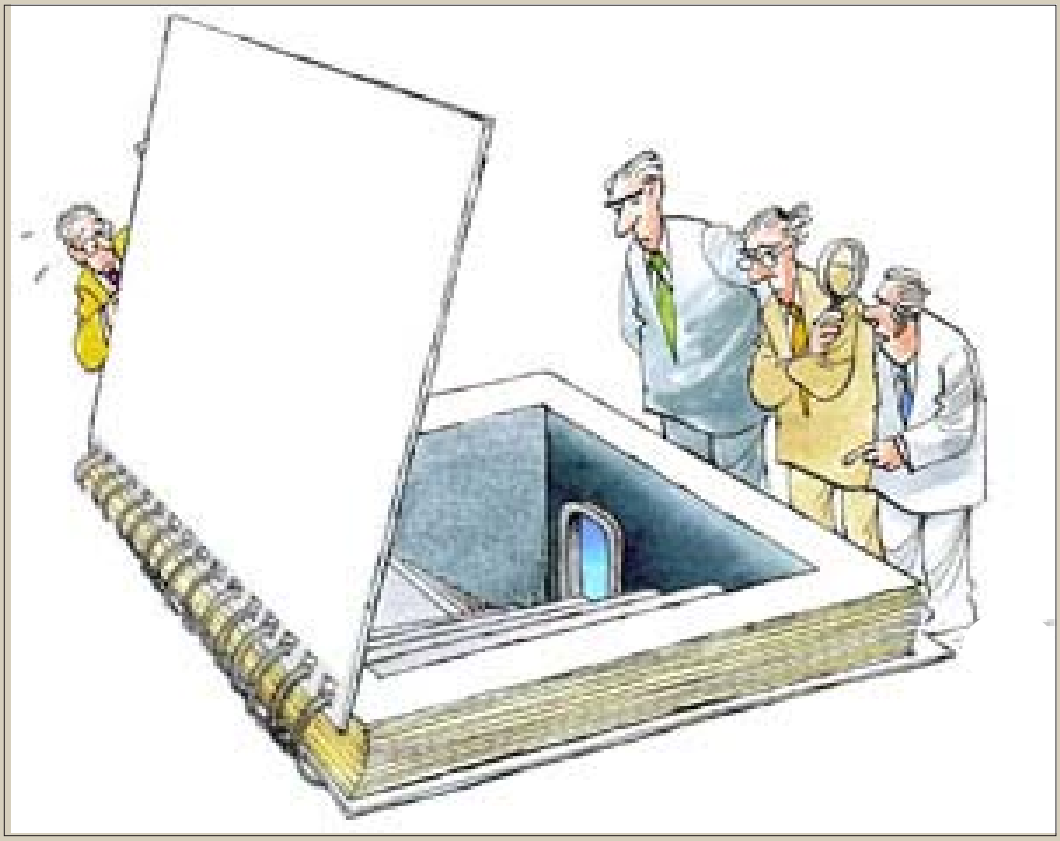
La disyuntiva a la que se enfrenta el jerarca en una licitación o llamado es por lo general la siguiente: la oferta más atractiva en cuanto a su contenido es casi siempre la más cara.

Entonces si se adjudica a la que se considera mejor, se estará adjudicando a la de mayor valor y las sospechas arreciarán. Si se adjudica a la que es de peor calidad, se dirá que se compra lo peor.

Hay dos mecanismos para prevenir estos problemas y darle mayor transparencia a los procesos administrativos.

El primero lo aplicábamos en el Ministerio de Turismo. Consistía en fijar un determinado precio de antemano que era el que pagaría el Estado y hacer un llamado para que se provea lo solicitado dentro de ese precio.

Se adjudicaba a la mejor propuesta y todas presentaban el mismo precio.



Como podía sospecharse que la adjudicación no fuera a la mejor se conformaba una Comisión de Adjudicación integrada por un técnico del Ministerio, otro de un gobierno municipal y un tercero representante de los propios oferentes (que lo elegían de una lista de reconocidos profesionales en la materia).

Las propuestas además se entregaban sin identificar al oferente (con el sistema de doble sobre). La Comisión trabajaba tranquilamente e informaba de la propuesta ganadora en un acto público en el que se abría el segundo sobre y se conocía el nombre del triunfador.

La consecuencia de esto fue que se presentaban muchos más oferentes y que no existían reclamos posteriores.

Cuantos problemas nos podríamos haber evitado si esto se hubiera hecho así en la Televisión Digital en lugar de que se metieran el Presidente, el Ministro, el Director de la OPP, el asesor Presidencial y hasta la Presidente del Frente Amplio en el momento de adjudicar un canal y quitárselo a quien se había anunciado sería el ganador.

El otro sistema se aplicó, a sugerencia del entonces Ministro de Obras Públicas, Ing. Lucio Cáceres, en la exitosa y transparente concesión del Aeropuerto de Carrasco.

Durante meses se trabajó en estimar el monto de la inversión a hacer, las obras a realizar, y las garantías que se debían otorgar.

Luego se hizo un «data room» donde los posibles proponentes examinaron la información, hicieron preguntas y aportes. A partir de ello se hizo un llamado donde se calificó a las empresas que tenían el respaldo financiero para realizar la obra.

Finalmente, se hizo un remate público. En él, quien más ofreció en la subasta resultó el adjudicatario de la concesión.

Obviamente que el perdedor no podía objetar nada puesto que el ganador había ofertado más.

Claro que en esos casos hay que ser cuidadoso al estudiar las garantías y los avales. Como se hizo en el caso del Aeropuerto y de la Terminal del Puerto de Montevideo, pero lamentablemente no en el de Pluna.

En definitiva agregar mecanismos de transparencia como la participación de los propios proponentes designando entre todos un integrante del proceso que les dé todas las garantías o haciendo remates públicos es lo que evita mayores problemas. También ayuda permanecer callados durante el proceso y evitar las injerencias políticas.

De lo contrario corremos el riesgo de tener que llamar a los abogados para que traten de minimizar las consecuencias para el Estado los errores que se cometen.

Es que, a veces, no nos damos cuenta que la transparencia y el control nos protege a todos.

Incluso, a los que están en el Gobierno.

■



Washington ABDALA
Abogado. ex Diputado. Periodista. Docente Universitario.

No nos engañemos, lo de la «televisión» es una pelea por poder...

Las concesiones que se hicieron saben de eso. O creen en eso.
El poder cuando concede espacios de comunicación nunca es ingenuo.
Era -y es- inevitable que haya gente enojada con el fallo.
Igual el mundo no va por allí.
Es una pelea que en 5 años no existirá.
La televisión cambia a pasos agigantados y acá no se quiere ver eso.



Se mira para otro lado.
La gente está migrando hacia la red.
Mirará televisión desde allí.
Es solo un tema de tiempos.
La propia televisión abierta está jaqueda. Muchos creen que eso no pasará. Se equivocan.
El cable la jaqueó antes (un 70% del país tiene cable). Y la gente se fugó.
Los noticieros ya no hacen el rating de hace 10 años.
La gente no mirará más noticieros largoooos como los de acá. Y nadie hace nada para parar eso.
La gente mirará algo de deporte...y no siempre.
La gente seleccionará sus programas favoritos en la red y verá lo que quiere.
Eso es lo que viene y si no se piensa en ese encuadre se muere.
La nueva televisión es distinta a la que vemos en gran parte en el Uruguay.
Solo lo que genere identidad con rating se salvará.
El resto tiene partida de defunción.
Como siempre acá discutimos atrasados de todo. El debate debiera ser como regulamos esto que estoy hablando: la tele en la red.

Yo preferiría regular casi nada: el Estado regulando es un devorador.
Pero no, siempre es igual acá, todo llega tarde y cuando llega la sociedad ya decidió.
Capaz que es hasta mejor... que eso sea así...digo.
Con la reproducción asistida fue así...le ley llegó a reconocer lo obvio.
Con la telefonía celular hubo que hacer lo propio: primero la realidad luego la norma. (Hubo un decretito para ambientar lo obvio).
Hoy hay más de 500.000 celulares inteligentes en el país.
¿No le dice nada a los genios del gobierno este asuntillo?
Son computadoras, pantallas, televisiones, son todo.
Los teléfonos ya no son teléfonos, son todo: medio de pago, computadora, tele y hasta respirador.
En poco tiempo esto seguirá así. Mucho más así.
Los que estamos en las redes no creemos que algún día vendrá el Mesías.
Para nosotros el Mesías ya llegó: es la voracidad de la red (un millón y medio de facebookeros en Uruguay!!!).
Los tipos que laburamos en social media sabemos que esto no es un panfleto: es la realidad.
Raro que en el gobierno no haya pensamiento prospectivo al respecto y que todo sea con tanto olor a naftalina.
Y me asombra porque siempre las izquierdas se caracterizaron por leer el tiempo que viene con bastante precisión.
Esta vez están en el Renacimiento cuando la Posmodernidad ya está acá.

■



Diego MARTINEZ
Periodista. Director del semanario LIBERTAD

La clase media quiere seguros

La agencia A.M. Best informó por estos días que «el crecimiento económico en los últimos años ha dado lugar a una reducción significativa del nivel de la extrema pobreza en muchos países de América Latina». Ya el año pasado, un estudio de especialistas del Banco Mundial («La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina»), había estimado que cerca de cincuenta millones de personas salieron de la pobreza en América Latina entre 2000 y 2010.
Existen diversas formas de definir los conceptos de pobreza y de clase media. Pero más allá de los formatos y/o criterios aplicables, una coincidencia se instala y constituye una buena noticia: la pobreza tiende a retroceder, la clase media avanza y el mapa social se modifica en América Latina.
Con cifras equivalentes, además, de población aún en la pobreza y de la que ya integra la clase media con estabilidad, cuando apenas una década atrás «el porcentaje de pobres equivalía aproximadamente a 2,5 veces el de la clase media».
Hoy por hoy y en los términos en que lo analiza el estudio mencionado, podemos ver la población latinoamericana distribuida en un 30.5% de pobres, 30% perteneciente a la clase media, 2% de ricos y un 37.5% constituido por personas, los denominados «vulnerables», que pertenecen a «hogares con una probabilidad relativamente alta de vivir episodios de pobreza en el futuro».
Este proceso, menos pobreza, más clase media, no debe tener en modo alguno marcha atrás. Como ha escrito Ramón Muñoz en El País de España «Los países dejan de ser pobres no por el puesto que ocupan sus millonarios en el ranking de los más ricos -de ser así, México o la India estarían a la cabeza del mundo dada la fortuna de sus potentados-, sino por la extensión de su clase media».
Desviar u omitir una política hacia ese mayoritario sector denominado «los vulnerables» resulta estratégico. Del estancamiento, o el salto hacia la riqueza de sus integrantes, dependerá que nuestros países latinoamericanos accedan por fin al elenco de los desarrollados. Y en ello, el seguro es la herramienta elegible por los gobiernos para evitar la «marcha atrás» de la clase media en su proceso de crecimiento y consolidación.
Por su concepto, función, universalidad, activos y respaldos económicos, técnicos e históricos y por su organización, el seguro cuenta con capacidad de respuesta para problemas pequeños en que el Estado resulta demasiado grande y hasta para problemas tan grandes en que el Estado resulta insuficiente. La dinámica que habilita los actuales resultados a favor de un crecimiento de la clase media, es la de la movilidad ascendente. Ella tiene que ver con lo que una familia dirime a diario en su búsqueda del bienestar y del goce de sus derechos, la salud, el trabajo, la educación, acceso a bienes y servicios de calidad, el retiro, la vida, la vivienda, el descanso.
¿Qué conspira para que ello no se consolide como proceso irreversible? El riesgo.
Un ex pobre que adquiere nivel económico superior, no ingresa automáticamente en la clase media pues ciertos riesgos -de diversa índole- le seguirán acechando en tanto no cuente con un marco protectivo, asegurativo. Ese esquema protectivo, asegurador de su movilidad ascendente, debe estar basado en planteos concretos, en los que el Estado debe operar, orientar y hasta subsidiar y coparticipar en coberturas.
En algunas situaciones de riesgo de catástrofe, de riesgos agrícolas, el Estado participa financiando la totalidad o parte de las primas de seguros. De este modo, el rol del seguro ya resulta incuestionable en la gestión de varios riesgos.
Lo mismo debería ocurrir con otros como catástrofes climáticas, por agresiones en la familia, por frustraciones en el acceso a los servicios educativos, de salud, de seguridad, de crédito, por ausencia o limitación en el derecho a planificar el retiro, por los efectos de la muerte en la familia y allegados, por el desestímulo respecto al ahorro, por las dificultades para consolidar la propiedad en bienes fundamentales, por la pérdida del trabajo, por la destrucción de un proyecto empresarial.
Tanto pobres con boleto hacia la clase media, como integrantes de la clase media en zona de embarque hacia la pobreza -por primera vez, o de retorno- deben contar con una visión proyectiva de parte de los gobiernos, de consistente sustento republicano y humanista. Algo así como el compromiso para que nadie caiga en la pobreza ni retorne a ella. El camino definitivo, al mismo tiempo, para que en un futuro cercano ya nadie nazca pobre.

■

AFAPs: una revancha ideológica inútil y perniciosa

Pablo MIERES
Abogado. Sociólogo. Partido Independiente



En estas horas, como parte de la tradicional corrida legislativa previa al año de campaña electoral, el partido de gobierno aprovechando su mayoría absoluta regimentada busca aprobar un conjunto de normas legislativas que se interpretan como urgentes y que no pueden esperar al próximo período de gobierno.

Como siempre, también, en el atropello de último momento, suelen producirse errores de todo tipo y calibre, pero el afán de aprobar lo que se considera fundamental predomina sobre el cuidado y la reflexión que debería existir en la consideración y aprobación de instrumentos legislativos.

Uno de los proyectos que corre tal suerte es el que establece la posibilidad de la desafiliación voluntaria de las AFAPs para aquellos afiliados que tengan entre cuarenta y cincuenta años.

Se ha dicho que este tema ha sido objeto de una larga discusión en el marco del diálogo sobre la seguridad social del que participamos todos los partidos y organizaciones sociales vinculadas con esta temática. Esto es así, pero también es cierto que esta solución que ahora se vota «a tapas cerradas» no fue resultado de un acuerdo o consenso político, sino que surge con el único apoyo del partido de gobierno y del movimiento sindical.

Se ha dicho que el objetivo de esta norma es otorgarle al ciudadano la posibilidad de optar, aumentando sus derechos y permitiendo evaluar con mayor precisión su mejor beneficio con respecto a la futura jubilación. Sin embargo, no se explica por qué se elige una franja etaria que no es la que está en una situación de mayor riesgo y se deja afuera a los de edad más cercana al evento jubilatorio.

Pero, particularmente, no se entiende por qué la opción que puede tomar el afiliado entre cuarenta y cincuenta años, en caso de elegir desafiliarse, será irreversible. Si el objetivo de la normativa es otorgar mayores posibilidades de elección a los ciudadanos, ¿por qué se restringe su libertad de elegir impidiéndole volver atrás en su decisión si más adelante evalúa que es mejor reafiliarse a una AFAP?

Es obvio que en la vida laboral, la persona puede tener diferentes avatares y lo que hoy le resulta más conveniente en cuanto a la modalidad de ahorro, puede cambiar unos años después, en uno u otro sentido. Sin embargo, la aparente mayor libertad de elegir que aducen los impulsores de la normativa, desaparece después que la persona se desafilia de la AFAP condenándola a quedar en el BPS para el resto de su vida y habiendo perdido sus ahorros individuales que se volcarán en la masa de recursos que el BPS posee.

Aquí está la verdadera motivación de la iniciativa. El objetivo real de la propuesta es procurar impulsar la desafiliación de los ciudadanos con respecto a las AFAPs, promoviendo la reinstalación del viejo sistema de reparto. No hay que olvidar que buena parte de los impulsores de la norma han sido y continúan siendo contrarios, por razones ideológicas, al régimen mixto de seguridad social.

Por eso buscan, mediante este mecanismo, revertir lo que se aprobó hace ya casi veinte años.

Se olvidan los impulsores de esta nueva iniciativa que nuestra estructura demográfica cada día más nos obliga a generar sistemas que permitan un manejo más amplio y diversificado de las alternativas jubilatorias; siguen nostálgicos de un tipo de régimen que la realidad estructural de nuestra población ha determinado como inviable e imposible.

Estas posturas son exclusivamente ideológicas y ajenas a un análisis objetivo de la realidad concreta que nos dice que las alternativas para el país van por el lado de la confirmación de la opción tomada hace casi dos décadas.

La vuelta a un sistema únicamente basado en el BPS determinaría una nueva crisis de su financiación aun más grave que la que existía cuando se llevó a cabo la reforma.

Pero, el efecto de la aprobación de esta norma será negativo porque genera incertidumbre sobre la masa de afiliados con las que contará cada AFAP al generar una interrogante sobre la decisión que tomará cada afiliado, lo que probablemente lleve (como se ha advertido) a que estas administradoras de fondos previsionales sean más cautelosas en sus inversiones y, por lo tanto, afecten la rentabilidad de los ahorros de los ciudadanos que continúan afiliados a estas administradoras.

En síntesis, se trata de un proyecto inútil desde el punto de vista práctico, que puede tener impactos negativos sobre la suerte de aquellos ciudadanos que opten por la alternativa generada por ley y sobre la rentabilidad futura de todos los afiliados a las AFAPs.

La única fundamentación que existe es la búsqueda de una revancha por parte de aquellos que en 1996 se oponían a la creación del nuevo sistema previsional y ahora querrían desmontarlo paulatinamente. La pregunta que uno se hace es por qué, otra vez, aquellos sectores del partido de gobierno que han estado de acuerdo con el nuevo sistema previsional y que saben que esta medida no va en la dirección correcta, no hacen valer su opinión y, por el contrario, se pliegan callados a la iniciativa propuesta. Bastaría que uno de los legisladores del partido de gobierno ejerciera su derecho a votar según su convicción para que el proyecto se frenara.



Sin embargo, otra vez queda en evidencia que la disciplina partidaria acompañada de la mayoría absoluta en el Parlamento, se ha convertido en un mecanismo que impone decisiones equivocadas y contradictorias. Una más y van...

■

Si el objetivo de la normativa es otorgar mayores posibilidades de elección a los ciudadanos, ¿por qué se restringe su libertad de elegir impidiéndole volver atrás en su decisión si más adelante evalúa que es mejor reafiliarse a una AFAP?



Sergio FERNANDEZ
Contador. Fue Director del Departamento de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo. FUENTE: semanario La Libertad

Que gaste menos el que gaste mucho, para que pague menos el que paga mucho

Despilfarro, inmoralidad

La Intendencia de Montevideo envió a la Junta Departamental una propuesta de amnistía tributaria parcial para los morosos de todo tipo de tributos con excepción de Patente de Rodados. Los dos principales tributos alcanzados serán la Contribución Inmobiliaria y la Tasa General Municipal (impuesto de puerta) con sus adicionales, en particular la Tasa de Saneamiento, pero también se favorecerán todos los demás deudores por tributos, excepto patente.

En 2010 la IM ya había puesto en práctica una generosa amnistía tributaria que además de bonificaciones en multas y recargos, topeaba las deudas (por ejemplo en un 70% del valor catastral del inmueble si éste era menor a $ 670.000) en los casos de Contribución Inmobiliaria y Tasa General Municipal, en un 50% del valor de aforo de los vehículos en el caso de Patente de Rodados, posibilidad de pagar hasta en cuotas reajustables por IPC durante varios años, y muchas otras facilidades.

Una amnistía tributaria es siempre profundamente injusta, desde que trata en forma desigual a los iguales. Si todos tienen obligación de pagar tributos para solventar el costo de la gestión de la ciudad, ¿por qué los que no cumplen se ven beneficiados con una rebaja de sus obligaciones y los que cumplen no? Es obvio que si unos pagan de menos otros pagan de más, aunque sea por la vía indirecta de tener un valor de impuestos a pagar superior al que tendrían si aquellos pagasen lo que les corresponde. Una familia cumplidora inevitablemente debió sacrificar otros consumos o inversiones para pagar sus impuestos. Pudo haber dejado de dar determinada educación a sus hijos, no haber comprado un bien o un servicio que le hubiese resultado útil o agradable tener, o pudo verse imposibilitada de ahorrar para su futuro.

Y ese sacrificio, ¿por qué? ¿Cuál puede ser el motivo para que tan solo 3 años después de otorgada la anterior, se proponga otra amnistía tributaria? No se puede aducir un deterioro excepcional de la situación económica, cuando el nivel de ocupación y el salario real han tenido evoluciones favorables para los montevideanos gracias a la histórica conjunción de situaciones internacionales positivas para el país. Sin embargo, la IM reconoce que la morosidad alcanza al 10% de los contribuyentes, lo cual es una cifra sideral cercana a los 100.000 ciudadanos, si tenemos en cuenta que existen algo más de 400.000 hogares en la ciudad y ésta tiene unos 970.000 habitantes mayores de 18 años.

Si en un escenario de crecimiento de la ocupación y del salario real en forma continua durante todo el período que va de la última amnistía a la actual, se llega al resultado de un 10% de los contribuyentes en mora, la explicación plausible es que la carga fiscal, el monto de los impuestos a pagar, se está tornando imposible de afrontar para cada vez mas familias de la ciudad por sus continuos incrementos.

La otra explicación posible, que la gente deje de pagar aún pudiendo



hacerlo, llevaría a concluir que la población está convencida que pagar impuestos en Montevideo es una estupidez que no merece la pena realizar, porque más temprano que tarde vendrá algún tipo de amnistía a beneficiar a los morosos. Probablemente no sea un postura generalizada, pero aquellos «listos» que la anticiparon podrán cosechar próximamente sus beneficios (que pagarán los «nabos» buenos pagadores, nunca estará suficientemente reiterado). El tema de fondo acá no es ni la amnistía ni las facilidades ni el porcentaje de morosos. El verdadero problema es que el incremento absolutamente desproporcionado del costo que tiene la IM para la población, tal como surge de analizar lo que pasó y está pasando en estos 24 años de gobiernos frenteamplistas: En dólares, el costo total de la IM pasó de U$S 86 millones en 1989 a casi U$S 600 millones en 2012. En valores reales, aumentó un 77% en el mismo período. Recibió un superávit de U$S 5 millones en 1989 y hoy tiene un déficit acumulado de aproximadamente U$S 80 millones, sin considerar el Plan de Saneamiento Urbano y U$S 135 millones si se tiene en cuenta estos programas con financiación compartida entre la IM y el BID.

La gestión de Ana Olivera viene de mal en peor pues sus déficit anuales ya superan en valores absolutos los peores resultados del período frenteamplista (gestión de Arana). La contrapartida natural del déficit acumulado por la gestión de la Intendenta Olivera es el creciente endeudamiento de la IM que alcanzó a U$S 193 millones al 31.12.2012, que se componen de U$S 103 millones de residuos pasivos (principalmente acreedores comerciales), U$D 24 millones de acreedores financieros (el principal es el BROU con U$D 16 millones), indisponibles no vertidos por U$S 20 millones, obligaciones extrapresupuesto a pagar por U$D 38 millones y otros por U$D 6 millones. Se puede decir que hasta el día de hoy la IM está financiando su déficit en forma principal mediante el retraso de los pagos (bicicleteo) a los proveedores comerciales.

Si dividimos el total que recaudó la IM en 2012 por impuestos a los montevideanos $11.118:815.078 entre los 1:319.108 habitantes de todas las edades que viven en la ciudad, da un monto anual promedio a pagar por persona de de $ 8.429. Una familia de padre, madre y dos hijos debió pagar promedialmente durante 2012 $ 33.716 (U$S 1.746 al tipo de cambio de cierre del ejercicio) para solventar el costo del descalabro municipal.

Al nivel al que ha llegado el costo de la IM para la población de Montevideo, éste resulta impagable. Las familias montevideanas no tienen recursos suficientes para financiar una Intendencia que cobra impuestos con valores de primer mundo, como se vio en un estudio tiempo atrás que demostró que la Contribución Inmobiliaria y la Patente de Rodados que se cobran en nuestra ciudad son tan caras o más que las que se cobran en las principales capitales europeas. Y ello porque esas familias no tienen ni remotamente los ingresos que tienen las familias de aquellos países. Pero además de ser impagable, es una inmoralidad porque se gasta mal y por varios motivos: A) Por un lado, el 51% del costo municipal se debe a los salarios de los funcionarios los que, por tareas que no son ni más complejas ni más exigentes que las que promedialmente realiza un montevideano común (y en muchos casos, bastante menos), cobra sustancialmente más. B) Por otro, como un 31% se va en gastos de funcionamiento, el costo operativo de la IM total es el 82% de su presupuesto y solo destina a inversiones en beneficio de los montevideanos el 18% restante (si bien con un nuevo criterio de contabilización propia de la IM se adjudica un 4% de los costos de mano de obra a inversiones, ello no altera en forma significativa el análisis). C) Si además observamos en qué tipo de actividades se usa el dinero, veremos que sólo el 44% se destina a las que podríamos llamar actividades básicas (vialidad, tránsito, transporte, alumbrado, acondicionamiento urbano, espacios públicos, áreas verdes, tierras y asentamientos, planificación urbana, saneamiento, limpieza y disposición de residuos). Otro 18% se va en actividades de apoyo (secretaría y prosecretaría general, comunicaciones y relaciones públicas, asesorías, recursos humanos, compras, administración tributaria, mantenimiento del palacio municipal, mantenimiento de vehículos, centro de fotocopiado, centro de cómputos, contabilidad, etc). Un 22% en actividades no prioritarias (actividades culturales en general, turismo, deportes, alcaldías). Y finalmente, un 16% en actividades que pueden ser privatizables, transferidas al gobierno central o, directamente, suprimidas (TV Ciudad, laboratorio, unidad de equidad de género y participación, grupo de educación ambiental, servicio fúnebre, Mercado Modelo, Mercado Agrícola, casino Parque Hotel, Polo Tecnológico, relaciones y cooperación internacional, integración regional, relacionamiento y apoyo internacional, unidad Mypes, promoción e integración del comercio alimentario, centros públicos de empleo, desarrollo local, centro de conferencias, planificación del conglomerado turístico, coordinación e información de turismo, Montevideo ciudad educadora, acciones dirigidas a la igualdad de oportunidades, unidad de convenios con ONGs, adulto mayor, juventud, mujer, infancia, unidad temática por los derechos de los afrodescendientes, policlínicas, etc.).En resumen: 62% en actividades prioritarias y conexas, 38% en actividades no prioritarias, duplicadas, transferibles y/o suprimibles.

No es un problema de amnistía, es un problema ético y de moral. Lo que hay que hacer es bajar el costo de la IM, primero porque se gasta demasiado, segundo porque se gasta mal y por último porque al tener que recurrir a amnistías periódicas para obtener mayor recaudación, se generan injusticias flagrantes entre los que se sacrifican para continuar pagando sus obligaciones por un tiempo más y los que van quedando por el camino.

■

La criatura ya tiene nombre, pero…

¿PARA QUÉ SIRVE EL ACUERDO?

Miguel Manzi
Abogado, ex diputado, Partido Colorado
miguelmanzi@gmail.com http://miguelmanzi.com



«Partido de la Concertación», así quedó bautizado el nuevo lema que registraremos colorados y blancos para votar juntos en las elecciones departamentales de Montevideo de 2015. Aunque en realidad el nombre es lo de menos; de hecho, nadie lo va a usar: el candidato blanco hará campaña bajo el sublema que elija, y el candidato colorado hará lo propio. Lo que importa es que el nuevo partido nos permitirá acumular los votos colorados y blancos y, de ese modo, transformar la rutinaria victoria frenteamplista de los últimos 25 años, en una elección altamente competitiva, como ya anuncian todas las encuestas; con el Acuerdo «peligramos ganar». ¿Pero para qué? ¿Para qué queremos ganar? ¿Para qué sirve el Acuerdo?

El perfil del voto CAPITAL

Según la encuesta de Cifra -divulgada el miércoles 23 en Telemundo de canal 12-, el FA tiene hoy en Montevideo una intención de voto de 34%, el Partido Nacional de 17%, el Partido Colorado de 10%, el 7% dice que votaría por una coalición conformada por ambos partidos, y el 32% está indeciso a quién votar.

Según Cifra, el panorama ha cambiado muy poco en los últimos meses: en abril la intención de voto por el FA era de 36% (hoy es 34%) y la de blancos y colorados se ha mantenido estable. «En estas condiciones, y sin coalición, el FA ganaría la elección departamental montevideana», dice.

Sin embargo, marca algunos datos: en octubre el 7% dijo espontáneamente que votaría por la coalición entre blancos y colorados, siendo la primera vez que se registran estas respuestas; en abril y agosto el FA tenía 10 puntos más que la oposición sumada, mientras que en octubre se da un empate; y los indecisos bajan seis puntos y el FA baja dos. «Esto no significa que Montevideo está dejando de ser frentista. Los montevideanos siguen siendo frentistas cuando votan al presidente y a la legislatura (en lo nacional), pero parece que en lo departamental (votando al intendente) tienen sus dudas», dice.



SE CAE EL RANCHO

Las naves insignias de la flota frenteamplista montevideana se vienen hundiendo, una tras otra, en las profundidades de la incompetencia, la ideología, el amiguismo, la autocomplacencia, los negocios políticos, la radical incapacidad para gestionar la enorme complejidad que supone administrar una ciudad de 1.4 millones de habitantes, por la que además circulan otros 300 mil de su área de influencia. ¿Cuáles son, o eran (hundidas están), esas naves insignias del proyecto frenteamplista en Montevideo? Para empezar, las mismas que las de cualquier gobierno municipal de cualquier signo: (1) limpieza y recolección de residuos, (2) calles, veredas y alumbrado, y (3) tránsito y transporte, comunes también a cualquier ciudad. Pero más particulares de Montevideo, (4) asentamientos y (5) seguridad. Y particularísima del Frente Amplio, (6) el modelito de descentralización y participación que a fórceps instalaron en el Departamento.

Pues bien: alcanza con nombrarlas para que se configure en quien escucha o lee la imagen del fracaso. ¿Es esta una verdad universal, o no? ¿Los frenteamplistas creen de corazón que Montevideo está bien gestionada? ¿Hay explicaciones razonables para no haber resuelto los problemas clave de La Ciudad después de 25 años detentando la suma del poder? ¿Diez de ellos compartidos con el gobierno nacional y coincidentes con el ciclo de crecimiento económico más extenso y profundo que conoció el país en toda su historia? ¿Hacemos puro «internismo» los opositores? ¿Somos neciamente destructivos? ¿No apreciamos las bondades del modelo? A ver, repasemos una vez más, que de repente estamos siendo injustos, sangrando por la herida de la contundente paliza electoral que se nos inflige cada cinco años.

(1) Limpieza y recolección de residuos. El otro día vi una barredora nueva por Av. Brasil, a las 2 de la tarde, dificultando el tránsito, pero como para que la viera todo el mundo. También veo a la gente de Tacuruses barriendo aquí y allá. Pero La Ciudad sigue siendo un chiquero. Aquel ensayo de las bolsas de distintos colores para clasificar en domicilio fracasó; el proyecto de los contenedores en los edificios de Pocitos fracasó; los puntos de clasificación para los hurgadores fracasaron; el plan de reinserción de los hurgadores nunca existió; la base del sistema de recolección, los contenedores, son un gigantesco fracaso; el año pasado estuvo por aquí Jaime Lerner, el mítico alcalde de Curitiba, que transformó a esa ciudad en la referente regional indiscutida en materia de urbanismo, y dijo que Montevideo tenía que vender los contenedores, pero todos miraron para el costado. El sistema no funciona, ¡NO FUNCIONA!

(2) Calles, veredas y alumbrado. Obras, digamos. Tengo por ahí la serie de los metros cuadrados de «intervenciones» en pavimentos de los últimos años, que solo confirman lo que cualquier montevideano sabe: no hubo ninguna, ninguna obra importante en el último cuarto de siglo. Apenas retoques, capas asfálticas, cordones separadores, algún cruce, y ahora el ensanche de Bvar. Artigas obligado por el shopping nuevo. Las últimas obras de porte que conoce La Ciudad son el túnel de 8 de Octubre, de 1961, y el viaducto de Paso Molino, de 1970 (los accesos fueron obra nacional, no departamental; e igual que el saneamiento, empezaron bajo la dictadura, y quedaron «blindados» financiera y técnicamente por los sucesivos préstamos del BID). Las rampas de acceso a las veredas son una burla cruel, porque las veredas están destruidas. Y si transita de noche, encontrará cualquier día del año el 40% del alumbrado público apagado. ¿Queda claro? NINGUNA OBRA.

(3) Tránsito y transporte. El fracaso emblemático en esta materia es el Corredor Garzón, tan, pero tan mal pensado y ejecutado, que obligó a parar las obras en Gral. Flores y a suspender el proyecto de Av. Italia. Garzón costó 50 millones de dólares, que no solo hay que pagar, sino que compromete el espacio de crédito a futuro. El nuevo director de Movilidad de la IM, Néstor Campal (quien sustituyó a Urse, responsable por Garzón, despedido de la IM y trascartón designado director de la empresa de cargas de AFE, sin que en la aldea a nadie se le moviera un pelo), Campal, decía, admitió públicamente que el Plan de Movilidad debía ser íntegramente revisado, que faltaban datos, que no se atrevía a seguir adelante en esos términos. Hombre serio parece Campal, lástima que tardó 25 años. La Ciudad empadrona 40 mil autos nuevos por año hace más de un lustro, y 100 mil motos. Que circulan por las mismas viejas calles y avenidas de hace 50 y más años. Y en las horas pico, trate Ud. de subirse a un ómnibus; o de agarrar dos semáforos seguidos; o mientras el tiempo lo permita, andar en bicicleta. Y en todo caso tenga cuidado, porque en Montevideo hay un muerto por día en accidentes de tránsito. Lo dijo Campal: NO HAY PLAN DE MOVILIDAD.

Se me acaba el espacio.

(4) Asentamientos. Siguen ahí las 170 mil personas, a las que el gobierno nacional dice que sacó de la pobreza. 170 mil personas, no se si se advierte la enormidad: dos estadios Centenario; ocho Éxodos del Pueblo Oriental; toda la población de Flores, Treinta y Tres, Río Negro y Durazno junta. INDECENTE.

(5) Seguridad. No es competencia municipal (como no lo es salud ni educación, y ahí están las policlínicas y las guarderías), pero ningún gobierno por local que sea puede desentenderse más del tema. Y vaya que tiene cosas para hacer la IM: alumbrado, podas, veredas, calles (sus obligaciones básicas hoy incumplidas), pero cámaras, guardias en espacios públicos, inspecciones de toda naturaleza, involucramiento activo en el diseño y ejecución de las políticas de seguridad para el Departamento, a cuyos ciudadanos el gobierno departamental representa, también frente a la autoridad nacional. Y la frutilla de la torta,

(6) la descentralización impuesta a decretazos, pero vacía, huérfana, expósita, libre de toda sospecha de participación y calor popular, como quedó probado y comprobado este último 27 de octubre, cuando para los Concejos Vecinales y el Presupuesto Participativo votaron 70 mil personas, menos que nunca desde 1993, y se postularon 946 candidatos, también menos que nunca en la historia del invento. Como le leí a Lucio Cáceres, el Frente mató al buen vecino, que dejaba tiempo y esfuerzo en las comisiones del barrio, y puso en su lugar al buen militante, agregando este escalón en la base de la carrera de honores políticos. Y todo generosamente financiado. Hablando de financiamiento, dejé sin mencionar la situación financiera de la IM, y los funcionarios, y sus sueldos, y los porcentajes destinados a inversión, y la morosidad, y las deudas a futuro, porque igual los uruguayos estamos todos ricos, o subsidiados, y tan cerca del verano no es momento de hablar de plata.

PARA ESTO ES EL ACUERDO

Por decir estas cosas, ¿soy un gorila irredento, cerdo fascista, enemigo de los pobres, amanuense de la oligarquía criolla, que me opongo en vano a la obra venturosa de un gobierno popular y progresista? Qué va, soy colorado y batllista, nieto de inmigrantes, servidor público y sufrido montevideano, que quiero una ciudad limpia, ordenada, pujante, segura, decente, amable, donde puedan vivir y prosperar en paz mis hijos y los hijos de mis adversarios. Pero para eso hay que cambiar a este gobierno; y para eso es el Acuerdo.